

Hay problemas que no estallan de un día para otro, sino que se despliegan silenciosamente hasta que, de pronto, se vuelven imposibles de ignorar. El gobernador Alejandro Santana, al revelar el efecto regional que puede tener la propuesta gubernamental de reducir transversalmente en un 3% el gasto público, ha desvelado uno de esos problemas durante la semana que pasó y nos ha mostrado que la institucionalidad de los gobiernos regionales en Chile podría estar encaminándose hacia un punto crítico.

La creación de los gobernadores regionales electos fue celebrada, con razón, como un paso significativo hacia la descentralización. Por primera vez, las regiones podían elegir directamente a una autoridad llamada a conducir su desarrollo con legitimidad democrática propia y con programas sometidos al escrutinio ciudadano.

Sin embargo, esa promesa de autogobierno regional quedó en buena medida atrapada en un diseño institucional incompleto, cuando no contradictorio.

Los gobernadores regionales son electos en contiendas muchas veces reñidas, en las que se confrontan visiones, prioridades y proyectos de desarrollo. Se trata, por tanto, de una investidura con un claro mandato político. Pero ese mandato se encuentra con una realidad mucho más prosaica: la carencia de atribuciones efectivas para ejecutarlo. La paradoja es evidente: los ciudadanos eligen a una autoridad política para que gobierne, pero el Estado le entrega herramientas administrativas limitadas y subordinadas.

Hoy, el núcleo de la acción de los gobiernos regionales consiste en proponer iniciativas de inversión pública, pues la seguridad sigue radicada en los delegados presidenciales o más precisamente en los secretarios regionales de Seguridad Pública. Lo mismo ocurre con la gestión y respuesta a emergencias, una facultad que continúa en manos del representante regional del Presidente de la República. Dos áreas muy sensibles y relevantes para la ciudadanía.

Las propuestas del Gore, hay que decirlo, que en rigor son elaboradas en gran medida por los consejos regionales (cores), deben luego ser canalizadas hacia el nivel central, que es el que finalmente decide su aprobación, financiamiento y ejecución. El margen de auto-

Lo que puso en evidencia el gobernador Alejandro Santana



Hardy Knittel V.
Bachiller en Historia

nomía real está limitado a una fracción acotada y muy reducida del total del gasto público en cada región.

Ese porcentaje no es sólo un dato técnico: es la medida concreta de la brecha entre expectativa y realidad. Con un margen tan estrecho, la posibilidad de impulsar políticas propias, innovar o responder con agilidad a las necesidades locales queda severamente restringida. En la práctica, el gobernador regional se asemeja más a un gestor de proyectos ante el nivel central que a un verdadero jefe de gobierno subnacional.

COORDINACIÓN

A esta limitación presupuestaria se suma una debilidad estructural en materia de coordinación. Formalmente, los gobiernos regionales tienen un rol coordinador de las Secretarías Regionales Ministeriales (seremis). Sin embargo, estas últimas dependen jerárquicamente de sus respectivas subsecretarías y ministerios en Santiago.

El gobernador carece de la autoridad necesaria para alinear a los servicios del Estado en torno a una estrategia regional coherente. Esa situación es la que ha quedado flagrantemente en evidencia con la decisión de rebajar en un 3% el gasto público, una decisión emanada del Ministerio de Hacienda, sin que las autoridades regionales tengan más opción que solicitar una reconsideración en vistas de los efectos que ella pueda tener sobre sus regiones.



EL 6 DE ENERO DEL AÑO PASADO, ALEJANDRO SANTANA ASUMIÓ LA GOBERNACIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS.

El gobernador Santana, en su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, se entrevistó este pasado viernes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para solicitarle que establezca diferencias en la aplicación de esa medida, excluyendo de ella a los servicios que han cumplido correctamente sus obligaciones y planes entre los cuales, ha asegurado, se encuentran aquellos localizados en las regiones. Sin embargo, su justa demanda no pasa de ser una petición sometida a la decisión exclusiva de una autoridad totalmente ajena a los compromisos que el gobernador suscribió con la ciudadanía que lo eligió: es una

decisión que se tomará en Santiago.

¿A QUIÉN PEDIR CUENTAS?

El resultado es un diseño institucional que confunde responsabilidades y diluye rendiciones de cuenta. ¿A quién deben exigir cuenta los ciudadanos cuando los problemas de la región no encuentran solución? ¿al gobernador que fue elegido con un programa, pero que no tiene los medios para implementarlo? ¿al delegado presidencial, que no fue electo para conducir el desarrollo regional, pero representa al poder central? ¿directamente a ese poder central?

Esta ambigüedad no sólo dificulta la gestión: también de-

bilita la legitimidad del sistema político.

El riesgo de mantener este esquema es alimentar el desencanto ciudadano frente a una descentralización que, en los hechos, no cumple con las expectativas que ella misma generó. Abordar este problema antes de que escasee exige una decisión clara: o se avanza hacia una descentralización efectiva, dotando a los gobiernos regionales de mayores competencias y recursos, o se revisa o aun se revierte el modelo para sincerar una realidad en que la verdadera jefatura regional sigue estando en Santiago y en muchos casos en Teatinos 120, en las oficinas del ministro de Hacienda.

Lo que puso en evidencia el gobernador Santana, es que una descentralización real no se agota en la elección de autoridades. Supone, además, transferir capacidades de decisión, control presupuestario y herramientas de coordinación. Implica aceptar que el desarrollo de las regiones requiere grados significativos de autonomía, así como mecanismos claros de responsabilidad política.

De lo contrario, se corre el riesgo de haber construido una institucionalidad que, en lugar de acercar el poder a las regiones, termina reforzando la dependencia del centro bajo una apariencia de cambio. De estar protagonizando algo que más bien parece una mascarada. 